«Rescate» limitado de planes de pensiones por desempleo o cese de actividad

Lourdes López Cumbre

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria

Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

Ante la situación de desempleo o de cese de actividad, el Gobierno dispone el «rescate» limitado de los planes de pensiones según las rentas o ingresos dejados de percibir y en función de los derechos consolidados de los partícipes.

1. De acuerdo con la Disposición adicional 20ª del Real Decreto-ley 11/2020, 31 de marzo, BOE, 1 de abril, durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, BOE, 14, por el que se declara el estado de alarma, los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en tres supuestos. Uno, cuando se encuentren en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Otro, cuando se trate de un empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020. Y, finalmente, en el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

En cuanto a las características generales de aplicación, conviene destacar que se trata de cualquier plan de pensiones y, por lo tanto, no distingue la norma si responde a un plan del sistema de empleo —cuyo promotor es cualquier entidad, corporación, sociedad o empresa y cuyos partícipes son los empleados de los mismos—, a un plan del sistema asociado —cuyo promotor (o promotores) es cualquier asociación o sindicato, siendo los partícipes sus asociados, miembros o afiliados— y a un plan del sistema individual —cuyo promotor es una o varias entidades de carácter financiero y cuyos partícipes son cualesquiera personas físicas—. Según las obligaciones que se recojan en los planes, éstos podrán ser de prestación definida, en los que se define como objeto la cuantía de las prestaciones a percibir por los beneficiarios, de aportación definida, en los que el objeto definido es la cuantía de las contribuciones de los promotores y, en su caso, de los partícipes al plan o mixtos, en los que el objeto será, simultáneamente, la cuantía de la prestación y la cuantía de la contribución. Los planes de los sistemas de empleo y asociados podrán ser de cualquiera de las tres modalidades anteriores pero los del sistema individual responderán únicamente a la modalidad de aportación definida. Todos ellos, en principio, y puesto que el legislador no discrimina, estarán supeditados a esta nueva posibilidad de rescate limitado del Real Decreto-ley 11/2020.

Por lo demás, la norma se refiere únicamente a los derechos consolidados de los partícipes y, por tanto, ex artículo 8.7 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones (en adelante, LPFP), en el caso de planes de pensiones de aportación definida, a la cuota que corresponde al partícipe, determinada en función de las aportaciones, rendimientos y gastos y, en el supuesto de los planes de prestación definida, a la reserva que le corresponda de acuerdo con el sistema actuarial utilizado. Como la regulación de los planes de pensiones distingue entre sujetos constituyentes de los mismos (promotor y partícipe) y elementos personales del plan de pensiones (sujetos constituyentes y beneficiarios, entendiéndose por tales las personas físicas con derecho a la percepción de prestaciones, hayan sido o no partícipes), debería considerarse que este rescate afecta tanto a partícipes como, en su caso, a beneficiarios toda vez que la referencia a aquéllos sólo se produce para fijar el «concepto» sobre el que se aplica el rescate —los «derechos consolidados del partícipe»— y no a otra cuestión. Sin embargo, esta nueva norma prevista en el Real Decreto-ley 11/2020 restringe a los «partícipes de los planes de pensiones» la posibilidad de que, excepcionalmente, puedan «hacer efectivos sus derechos consolidados», en una restricción que obliga a considerar sólo a los partícipes y no a los beneficiarios del plan.

Finalmente, y en cuanto a los términos generales de esta Disposición adicional 20ª del Real Decreto-ley 11/2020, la medida se extenderá durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma.

2. Mas el legislador restringe a tres supuestos concretos —eso sí, todos ellos relacionados con el COVID-19— la posibilidad de rescate.

Por una parte, y en relación a la situación de los trabajadores, el legislador contempla la posibilidad de rescate cuando el trabajador se halle en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado de la situación pandémica del coronavirus, que aporta poco en relación al régimen existente. No es la primera vez que la situación de desempleo genera el acceso al plan de pensiones. Ocurre, por ejemplo, cuando se prevé el pago de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en determinados supuestos, ex artículo 8.6.a) LPFP, o cuando el artículo 8.8 LPFP permite hacer efectivos a los partícipes los derechos

consolidados en los supuestos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave. Por eso, ahora, esta excepción es importante porque genera una vía para admitir situaciones de desempleo de menor duración, aun cuando, en este caso, con la justificación excepcional de esta crisis sanitaria. Obsérvese, no obstante, que no exige ser perceptor de la prestación por desempleo sino tan sólo hallarse en situación legal de desempleo.

Por otro lado, y ya en relación con las empresas o los trabajadores autónomos, se posibilita el rescate tanto al empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020 como a aquellos trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta prescripción merece, al menos, dos comentarios. El primero, que no sólo se encuentran afectadas las actividades recogidas en el precepto indicado sino otras que han tenido que sufrir una paralización posterior, por ejemplo, como consecuencia de las restricciones a la movilidad de los trabajadores en el Real Decreto 10/2020. Y, el segundo, que, como en el supuesto anterior, no se exige al trabajador autónomo ser beneficiario de una prestación por cese de actividad sino haber cesado en la misma.

3. Sin embargo, los titulares de este nuevo derecho de «rescate» del plan de pensiones no podrán «disponer» —la norma alude a la «disponibilidad» de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad— en su totalidad, sino que la cuantía de los derechos consolidados disponibles se encuentra tasada en la Disposición adicional 20ª.2 de este Real Decreto-ley 11/2020. En este sentido, el importe no podrá ser superior a: a) los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE indicado; b) los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público; o c) los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el caso de los trabajadores por cuenta propia. Para obtener la parte correspondiente de los derechos consolidados, los partícipes de los planes de pensiones deberán acreditar dichas cantidades.

En todo caso, el legislador indica que el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente y sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones.

4. El Gobierno se reserva la posibilidad, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de ampliar el plazo de los seis meses previsto para solicitar la liquidez de estos planes de pensiones en los términos expuestos, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se trata, por último, de una regulación excepcional extensible a los beneficiarios de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, BOE, 29, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De esta manera, se establece una regulación homogénea para todo el sistema de previsión social de nuestro ordenamiento jurídico.